

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/43371> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Jara Ibarra, C.

Title: Trayectorias de (des)movilización de la sociedad civil chilena : post-trauma, gobernabilidad y neoliberalismo en la restauración democrática (1990-2010)

Issue Date: 2016-09-29

Conclusiones

A partir del examen a las trayectorias de movilización y, en especial a través del *zoom* sobre el cuadro general de desmovilización de la sociedad civil al retorno democrático, se ha realizado un profundo análisis sobre el proceso socio-político y las grandes transformaciones sociales experimentadas por la sociedad chilena en las últimas décadas. Se constata la erosión y ocaso de una matriz socio-política tradicional que definió la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil durante gran parte del siglo XX. Además se observa la constitución, todavía en proceso, de una nueva estructura social y política con un correlato de nuevas identidades colectivas, formas y posibilidades de acción y movilización social.

Los objetivos planteados al inicio de este estudio fueron, en gran medida, concretados y se espera den paso a nuevas preguntas y espacios de análisis sobre el conflicto social y político en Chile, sus movimientos sociales, el estudio de la sociedad civil así como las dinámicas asociadas a los procesos de redemocratización. El estudio se ha sumado a una cierta tradición de las ciencias sociales latinoamericanas basada en el análisis de casos y de las estructuras sociales y políticas que condicionan la emergencia de la movilización social, ampliando, en este caso, el examen a un momento de invisibilización de la acción del tercer sector. Asimismo, el análisis recoge la perspectiva explicativa del modelo y teoría europea de los ‘nuevos movimientos sociales’, en términos de buscar e indagar en las causas que empujan a los actores a la movilización y, en menor medida, del enfoque norteamericano estructural-funcionalista, tendiente a entender la manera en que los movimientos sociales son desplegados. En otras palabras, se analizó el caso chileno considerando elementos tanto estructurales como motivacionales y la forma en que ambos aspectos se combinaron para dar forma o facilitar el repliegue de los sujetos colectivos.

Bajo la opción analítica de este trabajo, con foco en la identidad colectiva pero, al mismo tiempo, en la importancia del contexto socio-político en que se enmarca la acción social, la sociedad civil se entendió como una red de movimientos sociales y asociaciones que son producto o resultado de una contingencia histórica. Tal contingencia involucra y fue analizada en función de variables como el modelo de acumulación de capital y las relaciones de producción, el tipo de régimen político con su sistema de partidos y modelos de intermediación, los patrones culturales dominantes y los imaginarios sociales construidos en el proceso. Contempla asimismo una memoria colectiva aglutinadora y un marco jurídico que regula los tipos de asociación y la correlación de fuerzas entre las clases y diferentes grupos sociales.

Algunos de los objetivos de la investigación resultaron ser, no obstante, más esquivos. Es el caso lograr dar cuenta y hacerse cargo de la heterogeneidad y complejidad interna contenida en las (des)movilizaciones. Esto, pues aun cuando los movimientos y organizaciones de la sociedad civil puedan mostrarse como fenómenos homogéneos son, en realidad, heterogéneos y multiformes, con diversos objetivos y móviles, que pueden resultar equívocos, confusos o incluso contradictorios para los propios individuos involucrados en la acción colectiva. Se ha intentado sin embargo, el lector juzgará el resultado, dar un tratamiento que reconozca y considere dicha complejidad y no reduzca ni simplifique la sociedad civil a un actor unidimensional, aceptando que las demandas y reclamos encarnados por un movimiento social no representan exigencias transversales a la sociedad civil. Esto se volvió patente una vez que las movilizaciones sociales explotan en Chile el año 2011, pareciendo contener un sentir generalizado de la sociedad civil. Al poco andar, sin embargo, se hizo evidente todo tipo de complejidades, demandas diversas y muchas veces opuestas a los cambios y propuestas planteados por los movimientos sociales. Es el caso, por ejemplo, de las múltiples voces que reaccionaron oponiéndose a los cambios contenidos en la agenda reformista del segundo gobierno de Bachelet.

Se reconoce con ello que la sociedad civil posee una heterogeneidad intrínseca que lo vuelve un objeto de estudio elusivo y complejo, tal como ha dado cuenta la literatura especializada en su análisis. Se buscó asimismo mantener la coherencia de considerar a dicho actor como una arena compuesta por distintos actores colectivos con intereses y dinámicas que permiten avanzar, pero a momentos también retroceder respecto a la profundización democrática. La conversación con los líderes de los movimientos sociales ha entregado información relevante, pero en ningún caso conclusiva ni representativa de la totalidad de las motivaciones de quienes se involucran o deciden restarse de participar en movilizaciones: no ha sido el móvil de este trabajo un análisis generalizable ni unívoco sobre las dinámicas de la sociedad civil. De igual forma, se ha evitado caer en una visión apologética considerando a la sociedad civil como un representante de virtudes democratizantes, así como no se ha pretendido sugerir ni concluir que una democracia necesite - o no - de la acción de movimientos sociales, sino dar cuenta del fenómeno de la desmovilización post-dictatorial e intentar profundizar en su detalle y comprensión.

Se analizaron las trayectorias de (des)movilización de la sociedad civil como momentos en que este actor (tanto en sus dimensiones formales como informales) mostró mayores o escasos niveles de organización y densificación de redes, exposición y ocupación del espacio público. El chileno se presenta como un caso de estudio con nítidos períodos de (des)movilización, donde la acción colectiva se hace evidente y

explícita logrando un control acelerado de los recursos que persiguen (políticos, culturales, discursivos y mediáticos) y con ello de la agenda de prioridades nacionales y los contenidos del debate público, mientras en otros se observa un déficit, ausencia o desactivación de tal acción.

De igual manera, a lo largo del relato del libro fue posible identificar explícita o implícitamente, la presencia - o ausencia en el caso de la desmovilización -, de los elementos constitutivos de la acción colectiva presentados en el primer capítulo del libro. Tanto en términos históricos como contemporáneos, las movilizaciones en Chile se han visto influenciadas y potenciadas por la presencia de factores internos así como por la acción de un determinado *set* de oportunidades políticas o variables externas. En términos históricos, las fases de movilización han contado con la acción de agentes movilizadores que, ya sea como individuos (Luis Emilio Recabarren, Clotario Blest, Iván Fuentes o Camila Vallejo) o como sujetos colectivos (sindicatos y partidos políticos en el período previo a 1990 y más contemporáneamente la CONFECH), han servido para aglutinar, convocar y propiciar la acción colectiva. De la misma manera, la movilización se ha desplegado en base a una identidad colectiva, variable en el tiempo y compuesta por distintos elementos, entre ellos y de forma importante, de una memoria colectiva. Al desarrollarse, las movilizaciones han puesto en práctica un repertorio de acción que, en parte, recoge formas tradicionales de protesta, pero que en cada ciclo nuevas modalidades de acción colectiva son introducidas, mientras las antiguas son abandonadas o adaptadas: los motines y saqueos de principios de siglo evolucionan hacia formas más organizadas de protesta como las huelgas, se incorporan luego los cacerolazos a mediados de siglo o, a partir del año 2011, una serie de nuevos repertorios como besatones, maratones por la educación, bailes y el uso de las redes sociales para convocar las marchas, entre otras nuevas formas de acción social.

Los factores condicionantes de las movilizaciones así como del flujo y reflujo de la acción colectiva han sido diversos, pero normalmente se ha observado un juego entre las demandas de la sociedad civil y las dinámicas del Estado y del mercado, siendo mediadas por una memoria colectiva. Se constata así una relevancia sistemática de las hipótesis o factores explicativos utilizados para analizar la desmovilización post-dictatorial. Se ha comprobado, al mismo tiempo y en línea con los teóricos de los movimientos sociales, que las movilizaciones implican un proceso de relativa constancia que, en ciertos momentos se visibiliza, mientras en otros permanece oculto, determinado por las especificidades y particularidades de un determinado cruce tiempo-espacio. Con ello, en cada momento y coyuntura específica, los movimientos

sociales son moldeados por una amplia batería de restricciones y oportunidades únicas al contexto en que están insertas.

De forma específica, las trayectorias de (des) activación de la sociedad civil en Chile durante el siglo XX se vieron influenciadas - ya sea para inhibir o desatar - por el trauma de la represión y las matanzas obreras así como por una represión perpetrada en nombre de la estabilidad y gobernabilidad del Estado. Asimismo, los golpes de una economía fluctuante y de diferentes modelos y proyectos de desarrollo y modernización, afectaron el quehacer de los movimientos y las organizaciones sociales. El proceso socio-político desenvuelto a mediados del siglo pasado, permitió la diversificación de la sociedad civil de la época, constituyéndose múltiples campos de conflicto social y político que alcanzan su punto cúlmine en los años sesenta. Esta democratización e inclusión social provocó una expansión en las demandas y requerimientos de la sociedad civil que el Estado no fue capaz de atender dado un estancamiento económico y una inflación persistente, en un modelo que, en definitiva, no logró equiparar la inclusión política con la integración material. La reacción de los partidos y del sistema político a la presión ciudadana expansiva redundó en la polarización y en el incremento de la movilización social. Todo este proceso fue dramáticamente interrumpido por el régimen dictatorial, desatando una fase de desmovilización (1973-1982) forzada por la represión y los cambios estructurales al modelo político y económico impuestos por el régimen. Entre 1983 y 1990 se produce la última gran fase de movilización del siglo XX en las llamadas jornadas de protesta nacional, con un grueso entramado social así como nuevos tipos de movimientos sociales, más autónomos y diversos que aquellos observados en el período de la matriz clásica previa a 1973.

En el análisis de las trayectorias de (des)movilización se pudo asimismo comprobar la evolución desde un quehacer social enmarcado en una forma estadocéntrica de organización, con una clara división entre dirigentes y dirigidos y una disposición piramidal de la estructura de los movimientos, subordinados además a la acción de un partido-vanguardia como el gran conductor e intérprete de los intereses sociales. A partir de los años ochenta y especialmente visible en el ciclo de movilizaciones 2011, se da paso, en cambio, a nuevas formas de acción social marcadas por una mayor autonomía y un distanciamiento entre los movimientos sociales y los partidos políticos y el Estado.

De igual manera, su puede concluir que la acción colectiva en Chile se ha visto históricamente condicionada y ha tenido de forma, más o menos permanente, una respuesta represiva por parte del Estado. La acción represiva estatal ha permitido muchas veces, y tal como se presentara en el primer capítulo, precipitar el fin de un

movimiento social o el tránsito de una fase de movilización a una de desmovilización. El tratamiento represivo y autoritario a las movilizaciones y como fórmula para asegurar la gobernabilidad o el “hacer que las cosas se hagan”, se hizo especialmente evidente bajo la dictadura militar, donde la acción represiva fue utilizada tanto en la fase de desmovilización para desactivar a la sociedad civil a comienzos del régimen, como luego para contener la ola de movilizaciones de mediados de los años ochenta. La dura represión y, con ello, un alto costo de involucramiento en la acción colectiva para los participantes, limitó y restringió las posibilidades de la movilización de extenderse más allá en el tiempo. A esto, es necesario agregar el desgaste y la deslegitimización en que se sumió la acción de protesta como estrategia de salida al régimen dictatorial. El desgaste y derrota de la estrategia de movilización social junto a la consecución de sus objetivos - el retorno democrático -, entregan luces importantes para comprender el tránsito de una fase de movilización a una de desmovilización una vez recuperada la democracia. Estas representan, sin embargo, sólo algunas y las más inmediatas explicaciones del fenómeno de la desmovilización a partir de la década del noventa, tal como se ha buscado comprobar a lo largo del libro y en un hecho que se convierte en una de las principales conclusiones de esta investigación.

De esta manera, la tesis del cambio de régimen, el derrumbe de un enemigo común, el advenimiento democrático y, con ello, la consecución de los objetivos contenidos en las movilizaciones de los años ochenta, son los factores explicativos más evidentes y extensamente utilizados para comprender el tránsito desde la movilización de ese período a la desmovilización transicional. Estas certeras variables, sin embargo, explican sólo un aspecto y de manera superficial lo ocurrido en términos de la sociedad civil a partir de los años noventa y han facilitado asimismo que un análisis más exhaustivo y que considere tal complejidad haya sido más bien relegado, postergado y omitido. Desde la investigación contenida en estas páginas, queda en evidencia la complejidad y profundidad de los procesos socio-políticos acontecidos en la últimas décadas que, más allá del paso de una dictadura a un régimen democrático, la acción y desarrollo de la sociedad civil recibió el impacto de una constelación de factores psicológicos, políticos y económicos que dificultaron en gran medida la producción de movilización social.

Un aprendizaje político sobre las experiencias traumáticas del pasado que involucrara tanto a las elites como a la sociedad civil, junto a la imposición de un nuevo y radical modelo económico, se tradujo en un clima social de silencio y olvido, en prácticas políticas marcadas por la evasión del conflicto y la exacerbación del consenso, así como en la erosión y desarticulación de las subculturas partidarias, identidades y clases tradicionales asociadas al trabajo, al campesinado y a la pobreza

urbana. En otras palabras, no sólo se produce el término dictatorial y un retorno democrático, sino un proceso más profundo en que emerge una nueva cultura y prácticas políticas, donde la movilización de masas como herramienta de participación, ampliamente utilizada durante el siglo XX, es reemplazada desde finales de los años ochenta por la movilización electoral y una participación más privatizada, atomizada e individual.

Más aun, durante la fase de desmovilización en los gobiernos de la Concertación, se produce una transición, traslape o superposición de una sociedad antigua y una nueva. Con ello, en este período se observa una lenta pérdida de los valores y las reglas de conducta tradicionales y el posterior reemplazo por nuevos componentes normativos. Como se ha podido inferir para el caso chileno luego del fin de la dictadura, el régimen dictatorial supuso un ambicioso proyecto refundacional que implicó que se entremezclaran, de manera muy acelerada, formas nuevas y antiguas de ordenamiento social. La sociedad y las identidades que otrora generaban pertenencia y cohesión social, se vieron fragilizadas, los fines comunes o colectivos disueltos y se produjo un distanciamiento de los individuos respecto al grupo, en un contexto donde las normas, reglas de comportamiento y valores se volvieron ajenos o desconocidos.

En otras palabras, luego del fin de la dictadura en Chile tiene lugar una transición y mutación cultural, con una desintegración que forzó a los individuos, tal como lo describieran las teorías de desmovilización, a replegarse al ámbito privado como una forma de protección y preservación identitaria, donde cobra relevancia el dominio privado mientras surge una cierta apatía y desinterés individual respecto al curso que sigue la sociedad. Estos procesos, sindicados como necesarios y encargados de preservar la memoria colectiva y dar origen a las innovaciones que preceden siempre a los “renacimientos” de las culturas, parecen aplicar en su totalidad a lo ocurrido en la fase de desmovilización durante la redemocratización.

A la superposición de estructuras nuevas y tradicionales con un consecuente repliegue ciudadano, es necesario agregar la influencia de las tres grandes hipótesis desarrolladas en esta investigación como variables que facilitaron la desmovilización. La relación entre memoria post-traumática y la (des)movilización en el Chile post-dictatorial fue analizado en extenso como uno de los muchos legados de la dictadura militar sobre la redemocratización. El trauma instalado en la sociedad luego de la exposición directa o indirecta durante décadas a diferentes situaciones de violencia y recursos de dominación social, imprimió un miedo transversal a los conflictos del pasado en el presente. Se trató de una experiencia traumática dada la radicalidad de los cambios y el carácter refundacional de la dictadura, demandando una capacidad adaptativa por parte de los chilenos a las nuevas estructuras políticas, económicas y

sociales, y erigiéndose así en un punto de inflexión en el curso de las historias individuales y nacionales.

A lo largo del estudio se demostró que el impacto de este trauma fue multidimensional y se tradujo, luego de cesado el régimen, en un clima de silencio, olvido y negación que facilitó y tuvo fuertes implicancias sobre la fase de subsidencia de la sociedad civil post-dictadura. En específico, se analizó la forma en que la experiencia traumática se transformó en un impedimento para el desarrollo de una eventual acción colectiva en un contexto donde, como una reacción convertida en mecanismos de supervivencia, se evitó procesar y elaborar interpretaciones del pasado, mientras se promovió el silencio y el olvido a nivel individual y desde las políticas de Estado. De igual manera, los movimientos sociales vieron afectada su orgánica producto de la acción represiva dictatorial focalizada en las organizaciones, con recursos tales como el exilio, la relegación, la infiltración, la prohibición de reunión, así como otras medidas indirectas como la deslegitimación de la protesta y del ejercicio de la política. Al advenimiento democrático, dicha desarticulación social encontró dificultades para ser revertida y reconstruida en un contexto en que la desconfianza respecto a la acción colectiva se había enquistado en la sociedad.

Junto a lo anterior, se produjo una transmisión del trauma en paralelo a procesos de re-traumatización dada un contingencia transicional marcada por “irrupciones de la memoria” en la forma de atentados políticos o el arresto y posterior fallecimiento de Pinochet, hechos que forzaron un ejercicio reflexivo y una reinterpretación del pasado. Esto redundó en un proceso de redemocratización descrita como una democracia amnésica, donde la “caja de la memoria” estuvo cerrada tanto por la generación que vivió directamente el trauma como aquella generación más joven que lo experimentó de manera más indirecta, inhibiendo el desarrollo de una memoria común y un discurso colectivo aglutinador.

Sin embargo y a través del análisis y la información presentada, se puede inferir que a medida que la transición se fue desarrollando, la memoria colectiva traumática así como sus efectos comenzaron a evolucionar y a originar nuevas interpretaciones sobre el pasado y que permitieron nutrir ciertas demandas a partir del año 2011. El año 1998 con el arresto de Pinochet, se comienza a cerrar un ciclo definido por una memoria como olvido, hegemónica durante la transición temprana con un correlato de desactivación social. Este hecho, permitió desatar el nudo de la memoria y un cierto retroceso del temor de la población frente al mundo militar, así como respecto al miedo a la crítica, a la pluralidad y a la diversidad de opinión. Asimismo, los insumos para la acción colectiva se alimentaron de un pasado idealizado en torno a los derechos que se perdieron luego de la arremetida dictatorial, así como en una

transmisión de memorias de activismo, con la memoria o herencia mnémica como un puente inter-generacional en que se traspasaron identidades y formas de lucha del pasado. De igual forma, la noción de los derechos humanos se instaló dentro del repertorio de derechos básicos con demandas que comienzan a centrarse en darle contenido a la democracia y a permitir una nueva definición de derechos humanos relacionada con la profundización democrática, la inclusión y la equidad.

Y así como el trauma colectivo y la polarización, el conflicto, la represión y la violencia de la historia reciente del país marcaron el quehacer de la sociedad civil, tuvo al mismo tiempo un impacto en las elites políticas con un proceso de reflexión y aprendizaje que se tradujo en un quiebre con las formas de hacer gobierno previas a 1973. Las exigencias y constricciones propias de la transitología chilena, dieron forma a un paradigma de gobernabilidad específico así como a un tipo de relación de los partidos de la Concertación con la sociedad civil. La variable política, los factores externos a los movimientos y el rol de los agentes movilizadores como elementos desactivadores fueron analizados, demostrando que la desactivación social de 1990-2010 fue incitada por las características de la transición y el rol preponderante de las elites, las herencias dictatoriales en términos de rigidez institucional, así como por el control ejercido por el Gobierno y los partidos políticos sobre las organizaciones y movimientos de la sociedad civil. En específico, se comprobó que la movilización social fue inhibida por una contracción de oportunidades políticas tales como la consolidación de la negociación inter-elites en la toma de decisiones públicas, donde el rol de la sociedad civil quedó relegada frente a la conducción política de los partidos. De la misma manera, durante el período de los gobiernos de la Concertación y como una forma de dar estabilidad y controlar el restablecimiento de la democracia, se produjo una anticipación y neutralización de los posibles focos de conflicto y demandas sociales, un fuerte proceso de institucionalización de los movimientos así como la cooptación y las operaciones políticas para contener la presión social. Se buscó y se consiguió con ello limitar la movilización social o canalizarla a través de conductos institucionales, lo que se transformó en un obstáculo más para el desarrollo de acción colectiva luego de finalizado el régimen militar. Finalmente, la desmovilización fue propiciada por el despliegue de una serie de políticas públicas tendientes al fortalecimiento de la sociedad civil. Estas medidas, sin embargo, no se tradujeron en un empoderamiento de la sociedad civil, sino, al contrario y tal como se intentó demostrar, implicaron una redefinición del sentido de las organizaciones sociales desde prácticas solidarias hacia el microemprendimiento y la competitividad, limitando su capacidad de incidencia en los debates nacionales y contribuyendo a la atomización y la consolidación de un proceso global de despolitización.

Con ello, se mostró que las estrategias de gobernabilidad puestas en práctica por la Concertación contribuyeron a generar un clima de desactivación social, especialmente durante las primeras etapas de la transición. Los vínculos y modelos de relación del Estado con la sociedad civil, así como las condiciones institucionales y estructurales evolucionaron no obstante con el despliegue de la redemocratización y los desafíos de la transición, permitiendo la generación de insumos para la protesta de acuerdo a una nueva estructura de oportunidades políticas. Esto, se hizo especialmente evidente los años 1998 y 2006, cuando la fórmula de gobernabilidad elitista y la distante relación de la clase política con la sociedad civil comienza a quebrarse, poniéndose en marcha un enfoque con pretensiones más inclusivas que generó cambios en términos del flujo de oportunidades políticas, facilitó la apertura de un sistema político hasta entonces hermético y generó crecientes posibilidades para la emergencia de movilización social. Con un paradigma de gobernabilidad *elite-centred* con signos de desgaste y un sistema que se había “abierto” producto de las retóricas y las políticas de participación, la elección de Sebastián Piñera surge sin una clara estrategia de gobernabilidad, sin mecanismos de anticipación o canalización institucional de las demandas colectivas, una débil relación con el mundo social ni la acción de operadores políticos o vínculos directos con sectores sociales propensos a la movilización. Se constituyeron así verdaderos flancos de vulnerabilidad en la nueva administración, una nueva apertura del sistema y la emergencia de nuevas oportunidades políticas para la acción colectiva que irrumpe el 2011.

Finalmente, se demostró que el impacto de la revolución capitalista y la modernización neoliberal sobre la desmovilización hacia el fin de la dictadura fue múltiple. Los cambios que hasta entonces se habían desarrollado progresivamente e involucrado a dos o tres generaciones, se produjeron apresuradamente durante el régimen dictatorial impactando a una generación de chilenos que se vio enfrentada en un breve período a una nueva realidad social, con nuevas condiciones materiales y transformaciones ideológicas. La modernización neoliberal cambió la estructura productiva, el sistema de clases y las formas de integración social que hasta entonces se conocían, promovió la desarticulación de las relaciones preexistentes entre el Estado y la sociedad, así como la génesis de una nueva matriz socio-política centrada en la privatización de las prácticas ciudadanas. La irrupción de las reformas estructurales y el cambio en el modelo de acumulación, impactaron sobre el mundo del trabajo y la estratificación social, provocando la disolución de las categorías, organizaciones, movimientos, clases e identidades tradicionales tales como el movimiento obrero, campesino y poblador, protagonistas de las oleadas movilizadoras previas a 1973.

Emergió, al mismo tiempo, un fuerte proceso de mesocratización y movilidad ascendente con el surgimiento de una nueva clase media altamente heterogénea y con escasos elementos de cohesión en su interior, constituida en su mayoría por grupos provenientes de otras clases desestructuradas: se produce con ello un fuerte proceso de diferenciación social y fundamentos de clase relativamente débiles en términos de pertenencia, identidad colectiva y adhesión a intereses y proyectos colectivos.

Al mismo tiempo, la irrupción de la modernización neoliberal y su proceso refundacional en términos económicos, involucró el tránsito desde una matriz populista a una matriz productivista-consumista, con una consecuente masificación del consumo, acceso al crédito y al endeudamiento así como el florecimiento de nuevos estilos de vida orientados hacia el placer personal y el individualismo. Al constituirse el mercado en el principio organizativo de la vida social, no sólo se alteró la economía, sino que la adopción de sus lógicas definieron un proyecto cultural que transformó las prácticas y representaciones de la convivencia conocidas hasta entonces, favoreciendo una participación segmentada y el desinterés por las responsabilidades colectivas, confabulando contra un eventual proceso de movilización y expresión de demandas colectivas al retornada la democracia.

La modernización neoliberal contuvo así una serie de cambios y transformaciones que apalancaron una desmovilización, pero que al mismo tiempo permitieron un acelerado proceso de transformación sociales y el origen de una sociedad civil más crítica y exigente. En el contexto de un neoliberalismo avanzado, la sociedad chilena se enmarcó en un modelo económico que aún no logra solucionar el problema de la desigualdad y la concentración de la riqueza, pero que al mismo tiempo ha permitido la consecución de un cierto umbral de desarrollo y el mejoramiento en las condiciones materiales de gran parte de la población, con un aumento de la cobertura educacional y una democratización del consumo de bienes modernos y del acceso a la información. Todo ello redundó en una transformación valórica y normativa y la emergencia de una nueva cultura de carácter post-materialista en que la desigualdad, la injusticia social y la falta de oportunidades, problemáticas de larga data, ya no serán toleradas. El despliegue de la modernización neoliberal favoreció así un proceso de desmovilización, pero al mismo tiempo generó y alimentó nuevas demandas que fueron canalizadas por medio de la acción colectiva, dando paso a un nuevo ciclo político con diversos cuestionamientos y desafíos para el proceso de profundización democrática del país.

Se observó asimismo la movilización y la desmovilización de la sociedad civil como las dos caras de un mismo fenómeno. Se constató que en cada nueva oleada de activación y, en específico, en el período de desactivación transicional se redefinieron

las prácticas políticas, la cultura, los marcos normativos y valorativos en los que tales oleadas tuvieron lugar. El flujo y reflujo constante de la sociedad civil chilena ha tenido asimismo un correlato de consecución y ampliación de derechos civiles. Es posible así afirmar que el proceso político contenido en las trayectorias de (des)movilización en Chile está correlacionado con la ampliación derechos sociales, esto es, las (des)movilizaciones y la expansión de derechos se condicionan, son constitutivos y se potencian mutuamente. En otras palabras, a través de la movilización social se alcanzan y amplían ciertos derechos y, esta ampliación permite que se modifique el horizonte normativo así como la valoración y exigencia de nuevas demandas. En el caso chileno de los últimos años, el retorno democrático apalancado por la efervescencia social de los años ochenta, permitió el desarrollo y consolidación de una democracia que, a su vez, redundó en una transformación valórica y la emergencia de una nueva cultura de características post-materialistas con nuevos marcos de sentido y demandas sociales.

La influencia de factores políticos, psicológicos y económicos como grandes inhibidores de una eventual acción movilizadora en la transición, se constituyeron al mismo tiempo en componentes de una nueva matriz socio-política en la que se comienzan a sentar las bases y desarrollar—nuevas identidades que hicieron posible y, al mismo tiempo, se pusieron de manifiesto en el nuevo ciclo de movilizaciones de 2011.